# León, Guanajuato, a 17 diecisiete de febrero del año 2021 dos mil veintiuno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***V I S T O S***, para dictar sentencia definitiva, los autos del proceso administrativo identificado con el número **0428/2020-2do**, promovido por la ciudadana **(…)** y, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***R E S U L T A N D O :***

***PRIMERO.-*** Mediante escrito de demanda administrativa, presentado el día 11 once de marzo del año 2020 dos mil veinte, en la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Administrativos de este Municipio, la ciudadana **(…)**, por su propio derecho; promovió proceso administrativo; en donde señaló como: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **a).- Actos impugnados:** El acta de infracción con número: **T-6133246** (T guion seis-uno-tres-tres-dos-cuatro-seis), de fecha **25** veinticinco de **febrero** del año **2020** dos mil veinte y su calificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**b).- Autoridad demandada:** El Agente de Vialidad de este Municipio de León, Guanajuato, que emitió la boleta impugnada y la Tesorería Municipal. . . . . .

**c).- Pretensiones:** La nulidad del acto impugnado, así como la devolución de la cantidad pagada por concepto de multa y el pago de intereses generados. .

***SEGUNDO.-*** Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Segundo Administrativo el conocimiento del presente proceso, por lo que por auto del día 17 diecisiete de marzo del año 2020 dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda en contra de las autoridades demandadas; teniéndose a la promovente por ofrecidas y admitidas como pruebas, las descritas en el capítulo de pruebas de su escrito inicial de demanda; las que se tuvieron por desahogadas desde ese momento, dada su propia naturaleza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asimismo, se ordenó emplazar y correr traslado al Agente de Vialidad que emitió la boleta impugnada y a la Tesorería, para que dieran contestación a la demanda; lo que hizo el ciudadano **(…),** mediante escrito que presentó el día 17 diecisiete de junio del año 2020 dos mil veinte, (tangible a fojas de la 16 dieciséis a la 23 veintitrés), en el que planteó una causal de improcedencia, sostuvo la legalidad del acta de infracción emitida; que se encuentra debidamente fundada y motivada; consideró que eran improcedentes por infundados los conceptos de impugnación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Por su parte, el Tesorero Municipal de León, Guanajuato, Contador Público **Enrique Rodrigo Sosa Campos,** lo hizoel **19** diecinueve de ese mismo mes y año, quien también hizo valer una causal de improcedencia y manifestó que los conceptos de impugnación eran infundados. (Visible a fojas de la 31 treinta y uno a la 37 treinta y siete del expediente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***TERCERO*.-** Por autos de fechas 19 diecinueve y 24 veinticuatro de junio del año 2020 dos mil veinte, se tuvo al Agente de Vialidad y al Tesorero Municipal enjuiciados, por **contestando**, en tiempo y forma legal, la demanda instaurada en su contra; y, además, por ofrecidas y admitidas como pruebas, la documental aportada y admitida al actor, así como la que acompañó el agente a su escrito de contestación consistente en su gafete de identificación, (visible a foja 24 veinticuatro); probanzas que, dada su naturaleza, se tuvieron por desahogadas desde ese momento; y, la presuncional en su doble aspecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De este modo, al no existir pruebas pendientes de desahogo, en el último acuerdo señalado, se citó a las partes a la **Audiencia de Alegatos** a celebrarse el día **27** veintisiete de **agosto** del año **2020** dos mil veinte, a las **10:00** diez horas, en el recinto de este Juzgado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***CUARTO.-*** En la fecha y hora señaladas en el resultando anterior, se llevó a cabo la audiencia de alegatos; en la que, una vez declarada abierta, se hizo constar la **inasistencia** de las partes; así como que ninguna de ellas formuló alegatos; por lo que en esta misma fecha, se turnaron los autos para el dictado de la sentencia que en derecho proceda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***C O N S I D E R A N D O :***

***PRIMERO*.-** Este Juzgado Segundo Administrativo municipal es competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo, en base a lo previsto por los artículos 241, 243, párrafo segundo y 244, de la Ley Orgánica municipal para el Estado de Guanajuato; 1, fracción II, 3 párrafo segundo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; toda vez que se impugna un acto atribuido a un Agente de Vialidad adscrito a la Dirección General de Tránsito y al Tesorero Municipal; autoridades que forman parte de la administración pública municipal de León, Guanajuato. . .

***SEGUNDO*.-** El presente proceso administrativo fue promovido oportunamente, toda vez que la demanda fue presentada dentro de los 30 treinta días hábiles siguientes a aquél en que el demandante se ostentó conocedor de la calificación de la boleta, que fue el día 4 cuatro de marzo del año pasado, sin que de las constancias de la presente causa administrativa se desprenda lo contrario. .

***TERCERO.-*** La existencia de los actos impugnados en el presente asunto, se encuentra documentada en autos, con los originales del acta con folio número **T-6133246** (T guion seis-uno-tres-tres-dos-cuatro-seis), de fecha **25** veinticinco de **febrero** del año **2020** dos mil veinte y con el **recibo oficial** de pago número **19771705** uno-nueve-siete-siete-uno-siete-cero-cinco de fecha 4 cuatro de marzo de ese mismo año, por la cantidad de **$695.04** (Seiscientos noventa y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional); documentos que obran en el secreto de este Juzgado (visibles en el expediente, en copias certificadas a fojas 7 siete y 8 ocho), los que merecen pleno valor probatorio; conforme lo dispuesto en los artículos 78, 117, 118, 121 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; toda vez que se trata de un documento público, expedido por un servidor público, en el ejercicio de sus funciones; aunado el hecho de que el Agente demandado, en la contestación de demanda, **aceptó** de

**Expediente número 0428/2020-2do**

manera libre, expresa y sin coacción alguna, que **sí elaboró** el acta de infracción que se combate; lo que, sin duda, constituye una **confesión expresa** conforme a la interpretación gramatical y funcional que se hace del primer párrafo del artículo 57 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa en vigor en el Estado. . .

En razón de lo anterior, se tiene por **debidamente acreditada** la existencia de los actos impugnados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***CUARTO.-*** Por ser su examen preferente y de orden público, se analiza en principio, si en la especie, se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ya que de actualizarse alguna, podría imposibilitar el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre el fondo de la controversia planteada. . . . . . . . . . . . . .

Sentado lo anterior, se advierte que en el presente proceso, en su escrito de contestación, en el capítulo de causales de improcedencia, el Tesorero municipal hizo valer la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 261 del código de la materia, sosteniendo que no existe el acto impugnado, porque aseveró que la supuesta calificación que pretende atribuírsele, no es un acto administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Causal de improcedencia que **no se configura**; toda vez que el acto impugnado atribuido a dicha dependencia municipal, lo es, como bien lo asevera su titular, la calificación de la infracción; calificación cuya existencia se desprende del recibo oficial de pago, datado el día 4 cuatro de marzo del año pasado; que relacionado con lo que establece el artículo 122 del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato; que a la letra señala: *“Artículo 157.- La Dirección General de Tránsito Municipal y la Tesorería Municipal indistintamente, calificarán las infracciones de tránsito y vialidad, salvo en los casos en que se faculte expresamente a los Oficiales Calificadores…”* (Lo subrayado es nuestro); no deja lugar a dudas que la Tesorería Municipal puede calificar las infracciones al Reglamento de Tránsito citado; lo que con fundamento en los artículos 109, 112 y 130 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa en vigor en el Estado, **crea la presunción legal y humana de que la calificación impugnada fue efectuada por la Tesorería**. Presunciones a las que se les otorga pleno valor probatorio pues de ninguna forma son destruidas, de ahí que se considere que no se actualiza la causal de improcedencia invocada. . . . . . . . . . . . .

A efecto de reforzar que la Tesorería demandada calificó la infracción contenida en el acta impugnada, se debe decir que en el Municipio de León, Guanajuato, es un hecho notorio y público, que dicha dependencia municipal es la que califica las infracciones; dado que los todavía denominados Agentes de Tránsito, se limitan únicamente a levantar la boleta, por lo que cuando el ciudadano, -a fin saber si se le impuso una sanción y de recuperar el documento que se le haya recogido en garantía con motivo de una violación a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tránsito Municipal de León, Guanajuato-; no acude a la Dirección General de Tránsito Municipal, sino que concurre a cualquiera de los módulos que la Tesorería tiene instalados en la ciudad, en donde solamente se le indica que pase a las cajas a realizar su pago, pues de acuerdo a un tabulador y conforme al folio del acta, ya está determinado el monto a pagar con motivo de la infracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Por su parte, el agente demandado hizo valer la causal prevista en la fracción IV del mismo artículo 261, del código aplicable en la materia, al señalar que hay consentimiento tácito de los actos impugnados, porque la promovente pagó el monto de la multa; tampoco se actualiza esa causal, pues el gobernado tiene la posibilidad de realizar el pago y proceder a su impugnación, solicitando en su caso la devolución del monto erogado, tal y como ocurre en el caso en concreto.

Así las cosas, no habiendo planteado alguna otra hipótesis de improcedencia o sobreseimiento; y advirtiéndose, de oficio, por este Juzgador, que no se actualiza ninguna causal que impida el estudio de fondo de la presente causa administrativa, en cuanto a los actos impugnados, consistentes en el acta de infracción y su calificación; por lo que en consecuencia es procedente el presente proceso respecto de esos actos administrativos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***QUINTO.-*** Previamente al análisis del planteamiento de fondo formulado por la demandante, este Juzgador, en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, procede a fijar clara y precisamente los puntos controvertidos en el presente proceso administrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . .

De lo expuesto por la actora en su escrito de demanda, de la contestación de la demanda así como de las constancias que integran la presente causa administrativa; se desprende que el Agente de Vialidad de nombre **(…)**, con fecha **25** veinticinco de **febrero** del año **2020** dos mil veinte, levantó a la ciudadana **(…)** el acta de infracción con número **T-6133246** (T guion seis-uno-tres-tres-dos-cuatro-seis), en el lugar ubicado en: *“Calzada Tepeyac”*; con circulación de *“sur a norte”*, de esta ciudad*;* con motivos de: *“Por portar vidrio polarizado…”*; y *“Estar colocadas en el exterior una adelante y otra en la parte posterior”*; en tanto que en el apartado de referencia, escribió: *“Calzada Tepeyac con avenida Roma”,* y en el espacio para describir que fue detectado en flagrancia, escribió: *“Al circular por calle Calzada Tepeyac al pasar por… Av. Roma se detecta que el vehículo porta vidrio polarizado… no porta la placa de circulación delantera”;* recogiendo en garantía del pago de la infracción, la licencia para conducir de la gobernada, según consta en el cuerpo del acta materia de la *“litis”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*

Acta de Infracción posteriormente fue calificada, pues la impugnante también exhibió como prueba, el recibo oficial de pago con número **19771705** uno-nueve-siete-siete-uno-siete-cero-cinco de fecha 4 cuatro de marzo de ese

**Expediente número 0428/2020-2do**

mismo año, por la cantidad de **$695.04 (Seiscientos noventa y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional);** (perceptible a foja 8 ocho en copia certificada). . . . . . . . . . . . .

Acta que la enjuiciante considera ilegal, ya que estima que el acta es ilegal por ser emitida por autoridad incompetente y que está indebidamente fundada y motivada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 A lo expresado por la impetrante, el Agente de Tránsito demandado adujo que la boleta se encuentra debidamente fundada y motivada y, que los conceptos de impugnación son infundados, inoperantes e insuficientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Así las cosas, la *“litis”* planteada se hace consistir en determinar la legalidad o ilegalidad del acta de infracción con número **T-6133246** (T guion seis-uno-tres-tres-dos-cuatro-seis), de fecha **25** veinticinco de **febrero** del año **2020** dos mil veinte; además, la de establecer la procedencia o improcedencia de la devolución del monto pagado y de los intereses generados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***SEXTO.-*** No existiendo impedimento legal, se procede a analizar los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora, por lo que, aplicando el principio de mayor consecuencia anulatoria de los actos impugnados y en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que deben regir en toda sentencia, este Juzgador se adentrará al estudio del concepto de impugnación que considera trascendental para emitir la presente resolución y que trae un mayor beneficio al justiciable, como lo es el que enumera como **Primero**, del capítulo de conceptos de impugnación de su escrito de demanda; sin necesidad de transcribirlo en su totalidad, así como tampoco los restantes, sirviendo para ello el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado de Circuito, mencionado en la siguiente Jurisprudencia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.*** *El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. No. Registro: 196,477. Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. VII, Abril de 1998, Tesis: VI.2o. J/129. Página: 599”. . . . . . . . . . . .*

Así las cosas, en el señalado **primer** concepto de impugnación, el promovente expuso: *“…EL ACTA DE INFRACCION FUE EMITIDO POR UNA AUTORIDAD INCOMPETENTE….”**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*

A lo aseverado por la actora, las autoridades demandadas, expresaron que la boleta se encuentra debidamente fundada y motivada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Analizado que es lo expuesto por las partes, así como el acta de infracción impugnada, el concepto de impugnación señalado, en cuanto a la indebida motivación de la boleta en estudio, resulta **fundado**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En efecto, al consistir la fundamentación en la expresión del precepto legal aplicable al caso concreto, señalando asimismo la fracción, inciso o párrafo en la que se encuentre contenida dicha norma; y la motivación en el razonamiento inherente a las circunstancias del hecho, contenidas en el texto del acto, para establecer la adecuación de la conducta del gobernado en el supuesto jurídico establecido por la norma como prohibición o falta administrativa; luego entonces, del acta de infracción debe desprenderse, con claridad, en primer término, la cita del ordenamiento legal que corresponde al precepto que se considera infringido por la conducta desplegada por el infractor, y, si ese precepto incluye diversos supuestos, se debe precisar al apartado, párrafo, fracción o fracciones, incisos o sub-incisos que en su caso resulte aplicable, así como la descripción pormenorizada de las circunstancias que dan motivo para levantar el acta de infracción; de la que se desprenda con claridad que la conducta del infractor, percibida por el Agente, encuadra perfectamente en la hipótesis normativa aplicable; pues es necesario que el fundamento y motivo no se expresen de manera lacónica, ya que la fundamentación y motivación tienen como propósito primordial que la justiciable conozca el *"para qué"* de la conducta de la autoridad; lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa el dispositivo del ordenamiento legal que resulta aplicable al caso concreto y la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación *“pro forma”* pero de una manera insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, porque la prevalencia del dicho de la autoridad, puede dar lugar a arbitrariedades que deben reducirse al mínimo posible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Una vez analizada el acta de infracción impugnada, el concepto de impugnación en estudio, resulta ***fundado***; toda vez que en efecto, al consistir la fundamentación en la expresión del precepto legal aplicable al caso concreto, señalando asimismo la fracción, inciso o párrafo en la que se encuentre contenida dicha norma; y la motivación en el razonamiento inherente a las circunstancias del hecho, contenidas en el texto del acto, para establecer la adecuación de la conducta del gobernado en el supuesto jurídico establecido por la norma como prohibición o falta administrativa; luego entonces, del acta de infracción debe desprenderse, con claridad, en primer término, la cita del ordenamiento legal que corresponde al precepto que se considera infringido por la conducta desplegada por el infractor, y, si ese precepto incluye diversos supuestos, se debe precisar al apartado, párrafo, fracción o fracciones, incisos o subincisos que en su caso resulte

**Expediente número 0428/2020-2do**

aplicable, así como la descripción pormenorizada de las circunstancias que dan motivo para levantar el acta de infracción, de la que se desprenda con claridad que la conducta del infractor, percibida por la parte demandada, encuadra perfectamente en la hipótesis normativa aplicable; pues es necesario que el fundamento y motivo no se expresen de manera lacónica, ya que la fundamentación y motivación tienen como propósito primordial y “ratio” que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa el dispositivo del ordenamiento legal que resulta aplicable al caso concreto y la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación “pro forma” pero de una manera insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, porque la prevalencia del dicho de la autoridad, puede dar lugar a arbitrariedades que deben reducirse al mínimo posible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Así las cosas, en el asunto que nos ocupa, al analizar el Acta controvertida, se aprecia que el demandado la levantó como Agente *“B”* de Tránsito al consignar en la misma lo siguiente: *“En la ciudad de León, Guanajuato, el suscrito Agente B de Tránsito Municipal…”*, sin embargo es de resaltar que el Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato vigente a partir del día 1 uno de enero del año 2019 dos mil diecinueve, no contempla a dicha autoridad como competente para levantar las Actas de Infracción por faltas administrativas en materia de tránsito; toda vez que el competente para ello, lo es un **Agente de Vialidad**, tal como se establece en el artículo 138 del Reglamento antes citado, de ahí que resulte que el acto administrativo impugnado haya sido emitido por una **autoridad incompetente** para ello; lo que constituye un vicio de carácter formal, al no cumplirse con el elemento de validez previsto en la fracción I, del artículo 137, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo anterior, no obstante que la parte enjuiciada haya exhibido y ofrecido como prueba de su intención un gafete de identificación en el que se hace referencia al cargo de *“Agente de Vialidad”*; ya que ello no es suficiente para desvirtuar el hecho de que el acta combatida la emitió con el carácter de Agente de Tránsito, tal como consta en la misma, además de que no se exhibió ningún medio de prueba que lleve a la plena certeza jurídica de que la parte demandada, al momento de la realización del acto impugnado, ya ostentaba el cargo de Agente de Vialidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Así las cosas, al resultar fundado el concepto de impugnación analizado; se concluye que el Acta de infracción con número **T-6133246** (T guion seis-uno-tres-tres-dos-cuatro-seis), de fecha **25** veinticinco de **febrero** del año **2020** dos mil veinte, resulta ilegal al actualizarse la causa de nulidad prevista en el artículo 302, fracción I, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; por lo que es procedente decretar su **nulidad total;** así como **en consecuencia** de la misma**, se decreta** también **la nulidad total** de su **calificación**, que se desprende del recibo oficial de pago con número **19771705** uno-nueve-siete-siete-uno-siete-cero-cinco de fecha 4 cuatro de marzo de ese mismo año, por la cantidad de **$695.04** (Seiscientos noventa y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional) *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*. *. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*

Sirviendo de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del poder judicial de la federación dictada por la segunda sala, publicada en Tomo XXII, septiembre 2015, página 310 con número de registro 177347 que refiere los siguiente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.*** *De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro:* ***"***[***COMPETENCIA SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD***](https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=205463&Clase=DetalleTesisBL)***."****, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo* *16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*

***SÉPTIMO.-*** En virtud de que el primer concepto de impugnación, resultó fundado y es suficiente para declarar la nulidad total del acto impugnado; resulta innecesario el estudio de los restantes; ya que su análisis no afectaría ni variaría el sentido de esta resolución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia que a la letra señala:

***“CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.*** *Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia.”* Segundo Tribunal Colegiado Del Quinto Circuito. No. Registro: 223,103. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente:

**Expediente número 0428/2020-2do**

Semanario Judicial de la Federación. I, Abril de 1991. Tesis: V.2o. J/7. Página: 86. Genealogía: Gaceta número 40, Abril de 1991, página 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***OCTAVO****.-* De lo pretendido por la parte actora, se encuentra también lo concerniente a que se ordene al Agente demandado que devuelva la cantidad de **$695.04 (Seiscientos noventa y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional);** misma que la promovente pagó por concepto de multa impuesta, según se desprende del recibo oficial de pago con número **19771705** uno-nueve-siete-siete-uno-siete-cero-cinco de fecha 4 cuatro de marzo de ese mismo año. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pretensión que resulta **procedente**, al haberse decretado la nulidad total del acta de infracción impugnada; por consiguiente, con fundamento en el artículo 300, fracción V, del invocado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, **se reconoce** el derecho que tiene el justiciable a la devolución de la cantidad antes mencionada; por lo que el Agente demandado deberá realizar las gestiones necesarias ante la Tesorería Municipal para la efectiva devolución de tal cantidad y que ampara el recibo oficial de pago señalado; ello conforme al Criterio que sostiene el Pleno del antes denominado: *“Tribunal de lo Contencioso Administrativo* *del Estado”*, visible en la página 280 doscientos ochenta, de la publicación que contiene los *“Criterios 2000-2008”* de dicho Tribunal, el cual es el siguiente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***“DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DELA QUE EMANÓ EL ACTO ANULADO REALIZAR LAS GESTIONES PARA****.-Si el actor ocurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado a efecto de solicitar el reembolso del pago que realizó, por considerar que la infracción del que provino era ilegal, resulta correcto que el A quo condenara a su devolución a la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado, y no a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, pues el acto de autoridad (imposición y calificación de la infracción), por el cual el actor enteró esa cantidad al erario estatal, fue emitido por el titular de esa Dirección, no así la mencionada Secretaría, la que, en todo caso, se limitó a cumplir con su cometido de recaudar los ingresos estatales, como dispone el artículo 5º del Código Fiscal del Estado, por lo que corresponde a esa Dirección General de Tránsito y Transporte, realizar las gestiones necesarias para que quede sin efectos el pago realizado a la autoridad recaudadora y se devuelva al actor la cantidad cuyo acto de origen fue declarado ilegal”. (Toca 136/07. Recurso de Revisión interpuesto por Daniel García Razo, en su carácter de autorizado del Director General de Tránsito y Transporte del Estado. Resolución de fecha 9 de enero de 2008)****”***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ***NOVENO.-*** También como pretensión de la actora, está la de que se reconozca el derecho de pago de intereses desde la fecha en que se efectuó el pago, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derecho que **sí ha lugar** a reconocer, toda vez que la obligación de cubrir los intereses, surge a la vida jurídica por disposición legal, al estar contenida en un ordenamiento como lo es la Ley de Hacienda invocada, y haberse cubierto los requisitos que la misma señala para tal efecto, como lo son que: a) el contribuyente haya efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por una autoridad administrativa, en este caso de la multa; b) se interponga oportunamente el medio de defensa que las leyes establezcan; y, c) se obtenga una resolución firme favorable total o parcialmente; lo que en la especie se dio, por lo que **se ordena** al enjuiciado a que también realice los trámites que correspondan para el pago de los intereses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cálculo y pago de intereses que conforme a la tasa que, para los recargos, señale la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año **2020** dos mil veinte, se deberá hacer sobre el importe de **$695.04 (Seiscientos noventa y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional**); desde la fecha en que se realizó el pago (**4** cuatro de **marzo** del año **2020** dos mil veinte) hasta la fecha del reembolso de la cantidad erogada por concepto de multa. . . . . . . . . . . . .

Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio que sostiene el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, que a la letra dice: . . . . . . . . .

***“LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONSIDERA EL PAGO DE UNA MULTA COMO UN PAGO DE LO INDEBIDO.*** *De los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos: a) cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede de la cantidad adeudada; b) cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía, y c) cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal que se le ha determinado en un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede emprender las acciones siguientes (artículo 53 en comento): 1. Acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución del pago indebido, o 2. Demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal ilegal. En el caso número 1, si la autoridad no paga en el plazo de dos meses, contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminada a pagar intereses, que se computarán a partir de que se vencieron los dos meses, acorde lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Hacienda de los Municipios de Guanajuato. En el caso número 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante una autoridad judicial, y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución (artículo 52); empero, el cómputo de los intereses se realizará a partir de que aquel realizó el pago (artículo 53), ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio, conminado por un acto ilegal de la autoridad; por tanto, no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así, porque el primer supuesto (pago espontáneo) sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente, y por ende no es dable que con antelación se generen intereses a su favor. Empero, en el segundo caso, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar un pago al cual no estaba obligado (extremo que quedó acreditado por medio de la resolución judicial). Es este segundo supuesto el que tuvo lugar en el proceso de origen; entonces, y al contrario de lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio, y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado se actualiza lo señalado en el párrafo segundo del* ***a****rtículo 53 de la Ley de Hacienda para los Municipios de Guanajuato (pago de intereses computado a partir de que se efectuó el pago).* *(Toca 297/17 PL, recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del agente de tránsito y vialidad del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada. Resolución del 7 siete de septiembre de 2017 dos mil diecisiete).****”***(Localizable en la página web del Tribunal de Justicia Administrativa: https://www.tjagto.gob.mx/criterios-tja/). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Por lo expuesto, y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 246, fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 249; 287; 298; 299; 300, fracciones II, V y VI; y, 302, fracción II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, es de resolverse y se: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***R E S U E L V E*** *:*

***PRIMERO***.- Este Juzgado Segundo Administrativo Municipal determina ser **competente** para conocer y resolver del presente proceso administrativo. . . . . . .

**Expediente número 0428/2020-2do**

***SEGUNDO.-*** Resulta **procedente** el proceso administrativo promovido por la ciudadana **(…)** en contra del acta de infracción impugnada y su calificación. *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*

***TERCERO***.- Se **decreta** la **NULIDAD TOTAL** del **Acta de Infracción** con número **T-6133246** (T guion seis-uno-tres-tres-dos-cuatro-seis), de fecha **25** veinticinco de **febrero** del año **2020** dos mil veinte,así como **en consecuencia** de la misma**, se decreta** también **la nulidad total** de su **calificación**, que se desprende del recibo oficial de pago con número **19771705** uno-nueve-siete-siete-uno-siete-cero-cinco de fecha 4 cuatro de marzo de ese mismo año, por la cantidad de **$695.04** (Seiscientos noventa y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional); ello en base a las consideraciones lógicas y jurídicas expresadas en el Considerando Sexto, de la presente sentencia. *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*

***CUARTO.-*** Se **ordena** al Agente de Tránsito de nombre **(…)**, a que **devuelva** a la ciudadana **(…)**, la cantidad de **$695.04** (Seiscientos noventa y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional); ello en razón a lo expresado en el Octavo Considerando de este mismo fallo. . . . . . . . . . . .

**Devolución** que, de acuerdo a la interpretación funcional del artículo 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se deberá realizar dentro de los **15 quince días hábiles** siguientes a la fecha en que **cause ejecutoria** la presente resolución; debiendo **informar** a este Juzgado del cumplimiento dado a este resolutivo, acompañando las constancias relativas que así lo acrediten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ***QUINTO.-* Sí ha lugar** al **pago de intereses**, en los términos precisados en el Considerando Noveno de este fallo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notifíquese a las autoridades demandadas por oficio; y, a la parte actora personalmente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En su oportunidad, archívese este expediente, como asunto totalmente concluido y dese de baja en el Sistema de Control de Expedientes de los Juzgados Administrativos Municipales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Así lo resolvió y firma el Licenciado **Ernesto Alejandro Mora Álvarez**, Juez Segundo Administrativo municipal de León, Guanajuato, quien actúa asistido en forma legal con Secretaria de Estudio y Cuenta, la Licenciada **María del Rocío Villanueva Sánchez**, quien da fe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .